

N/REF: 0066/2025

En primer término, se debe señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe y de su carácter preceptivo, el preámbulo del real decreto proyectado debería indicar que ha sido sometido a informe previo de esta AEPD.

I

Según la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que acompaña al proyecto, la habilitación legal para dictar el reglamento que se proyecta aprobar radica, conjuntamente, en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales (en adelante, Ley de bienestar animal o Ley 7/2023) y en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal (en adelante, Ley de sanidad animal).

La disposición final octava de la Ley 7/2023 y la disposición final quinta de la Ley de sanidad animal facultan al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su respectivo cumplimiento, ejecución y desarrollo.

La MAIN —epígrafe II, “Oportunidad de la norma”, apartado A, “Motivación”, “Causas de la propuesta”— explica la doble habilitación legal del proyecto en estos términos:

“La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece en su artículo 51 que los animales de compañía se identificarán individualmente mediante un sistema y un procedimiento que se desarrollará reglamentariamente, en función de lo que se establezca para cada especie y que, en todo caso, los perros, gatos y hurones se identificarán mediante microchip y las aves, mediante anillado.

Asimismo, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, cuyo ámbito de aplicación no excluye a ninguna categoría de animales de compañía, indica en su artículo 39 que la Administración General del Estado establecerá las bases y la coordinación de un único y homogéneo sistema nacional de identificación de las diferentes especies animales. [...]

Por lo tanto, es necesario su desarrollo a través de este real decreto para dar cumplimiento a lo establecido tanto en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, como en la Ley 8/2003, de 24 de abril.”

Para la debida comprensión de las consideraciones que se han transcrito conviene recordar que la Ley 7/2023 de bienestar animal excluye de su ámbito de aplicación diversos grupos de animales. Así, el artículo 1 de la Ley 7/2023, “Objeto y ámbito de aplicación”, dispone:

1. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico básico en todo el territorio español para la protección, garantía de los derechos y bienestar de los animales de compañía y silvestres en cautividad, sin perjuicio de la sanidad animal que se regirá por la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, y por las normas de la Unión Europea.

[...]

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:

a) Los animales utilizados en los espectáculos taurinos previstos en los artículos 2 y 10 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, [...]

b) Los animales de producción, tal como se definen en la Ley 32/2007, [...] en todo su ciclo vital, salvo el supuesto de que perdiendo su fin productivo el propietario decidiera inscribirlo como animal de compañía en el Registro previsto en la presente ley.

c) Los animales criados, mantenidos y utilizados de acuerdo con el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, y los animales utilizados en investigación clínica veterinaria, de acuerdo con el Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, por el que se regulan los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente.

d) Los animales silvestres, que se rigen por lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, salvo que se encuentren en cautividad.

e) Los animales utilizados en actividades específicas (las deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado) así como los utilizados en actividades profesionales (dedicados a una actividad o cometido concreto realizado conjuntamente con su responsable en un entorno profesional o laboral, como los perros de rescate, animales de compañía utilizados en intervenciones asistidas o los animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas). Igualmente quedarán excluidos los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza. Todos ellos se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente, y que les sea de aplicación al margen de esta ley.”

El proyecto se estructura en un preámbulo y una parte dispositiva integrada por siete artículos, dos disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y dos anexos.

El artículo 1 versa sobre el “Objeto y finalidad de la norma”; el artículo 2 ofrece un catálogo de definiciones y el artículo 3 lleva por rúbrica “Requisitos generales para la identificación obligatoria de animales de compañía.” Los artículos 4 y 5 se ocupan, respectivamente, de los “Requisitos específicos en la identificación de perros, gatos y hurones” y de los “Requisitos específicos en la identificación de otros animales de compañía distintos de perros, gatos y hurones”. El artículo 6 regula las “Actuaciones del profesional veterinario identificador respecto a la identificación electrónica de animales de compañía” y el artículo 7 contiene el “Régimen sancionador”.

En cuanto a sus anexos, el Anexo I está dedicado a la “Información mínima sobre los animales de compañía de identificación obligatoria” (y sus apartados “A” y “B”, respectivamente, al caso de perros, gatos y hurones, y al caso de aves). El Anexo

II parte A, a las “Especificaciones técnicas de los transpondedores electrónicos” y el Anexo II parte B al “Código del transpondedor”.

Antes de referirnos al objeto y finalidad del proyecto, es obligado detenerse en las expresiones “*animales de compañía*” y “*animales de compañía de identificación obligatoria*” que emergen en el proyecto y que también utiliza la Ley 7/2023.

Con tales expresiones se designan dos grupos de animales de compañía siendo los de *identificación obligatoria* un subconjunto del primero. Así lo confirman algunas disposiciones del texto proyectado y algunos párrafos de la MAIN. No obstante, en ocasiones dichas expresiones se emplean sin rigor, aparentemente como términos sinónimos, lo que suscita confusión sobre su alcance y contenido.

Respecto a lo que debe entenderse por *animales de compañía* y *animales de compañía de identificación obligatoria*, el **artículo 2** del proyecto, “Definiciones”, se limita a hacer una remisión a las definiciones de la Ley 7/2023 y de la Ley 8/2003, de sanidad animal.

La Ley de bienestar animal (artículo 3, letra a) define “animal de compañía” como:

“animal doméstico o silvestre en cautividad, mantenido por el ser humano, principalmente en el hogar, siempre que se pueda tener en buenas condiciones de bienestar que respeten sus necesidades etológicas, pueda adaptarse a la cautividad y que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones o cualquier uso industrial o cualquier otro fin comercial o lucrativo y que, en el caso de los animales silvestres su especie esté incluida en el listado positivo de animales de compañía. En todo caso perros, gatos y hurones, independientemente del fin al que se destinen o del lugar en el que habiten o del que procedan, serán considerados animales de compañía. Los animales de producción sólo se considerarán animales de compañía en el supuesto de que, perdiendo su fin productivo, el propietario decidiera inscribirlo como animal de compañía en el Registro de Animales de Compañía.”

A su vez, el artículo 3.b) del mismo texto legal define el “*animal doméstico*” mediante una remisión a la Ley de sanidad animal que, en su artículo 3.4, dispone que son “*aquellos animales de compañía pertenecientes a especies que críe y posea tradicional y habitualmente el hombre, con el fin de vivir en domesticidad en el hogar, así como los de acompañamiento, conducción y ayuda de personas ciegas o con deficiencia visual grave o severa.*”

Por tanto, ni la Ley 7/2023 ni la Ley de sanidad animal, a las que se remite el **artículo 2** del proyecto, determinan en su respectivo artículo 3 (“Definiciones”) qué debe entenderse por “animales de compañía de identificación obligatoria” ni las especies que integran esa categoría.

Arroja luz sobre esta cuestión el artículo 51 de la Ley 7/2023, “*Identificación de animales de compañía*”, en el que se contraponen las expresiones “*animales de compañía*” y “*animales de compañía de identificación obligatoria*”. El precepto dispone:

“1. Los animales de compañía se identificarán individualmente, por un veterinario o veterinaria habilitada, mediante un sistema y un procedimiento que se desarrollará reglamentariamente, en función de lo que se establezca para cada especie. La identificación inicial de los animales sólo podrá realizarse a nombre de una persona criadora registrada, entidad de protección animal o Administración Pública autorizados, pudiendo realizarse una transmisión posterior a otras personas físicas o jurídicas en los términos contemplados en esta ley.

2. Sin perjuicio de lo anterior, serán obligatoriamente objeto de identificación, mediante microchip, los perros, gatos y hurones, así como las aves, que serán identificadas mediante anillado desde su nacimiento. La inscripción de todos los animales de compañía se realizará en el Registro de Animales de Compañía de cada comunidad autónoma.”

Por tanto, tienen la consideración de animales de compañía de identificación obligatoria los perros, gatos, hurones y las aves. Así lo confirma el Anexo I del proyecto —“Información mínima sobre los animales de compañía de identificación obligatoria”— que a través de sus dos apartados (A y B) se refiere exclusivamente a “perros, gatos y hurones” y a “las aves”.

El **artículo 1** del proyecto, “Objeto y finalidad”, que alude en sus apartados **1 y 2**, respectivamente, a los “animales de compañía” y a los “animales de compañía de identificación obligatoria”, establece:

“1.El presente real decreto regula el sistema de identificación de los animales de compañía en el territorio español.

2. El real decreto tiene como finalidad establecer un sistema único y homogéneo de identificación de todos los animales de compañía de identificación obligatoria, y en particular:

- a) Mejorar el control y la trazabilidad de los animales de compañía para garantizar sus condiciones de bienestar animal.*
- b) Disponer de mecanismos adecuados para prevenir la difusión de enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional.*
- c) Facilitar la información sobre el origen y características de los animales de compañía para asegurar la trazabilidad y luchar contra el tráfico ilegal.*
- d) Prevenir el abandono de animales de compañía y facilitar la actuación de las autoridades competentes.”*

II

El RGPD y la LOPDGDD conforman en España el marco jurídico de referencia en materia de protección de datos de carácter personal. Estas normas regulan los principios que presiden el tratamiento, las obligaciones del responsable y encargado y los derechos de los interesados a los que debe ajustarse cualquier modalidad de tratamiento de datos de carácter personal efectuado por cualquier persona, pública o privada, en el ejercicio de su actividad.

Todo tratamiento de datos personales debe realizarse sobre una base jurídica adecuada conforme al RGPD. El artículo 6.1 relaciona taxativamente las

circunstancias que pueden operar como fundamento de licitud de un tratamiento de datos, de tal manera que sólo será lícito si, al menos, concurre una de ellas.

El tratamiento de datos de carácter personal no sólo deberá cumplir el principio de licitud, sino acumulativamente el resto de los principios que presiden el tratamiento, establecidos en el artículo 5 del RGPD, precepto que dispone:

“Los datos personales serán:

a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

2.El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).”

El artículo 5.2 del RGPD incorpora el principio de *responsabilidad proactiva*, en virtud del cual el responsable responde del cumplimiento de los principios que establece el artículo 5.1 y de poder demostrarlo, y a tal fin debe aplicar las medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas en función de diversos factores, entre ellos, los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas que entrañe el tratamiento (artículo 24 RGPD), con el objeto de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento (UE) 2016/679. Las medidas apropiadas que se adopten estarán concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento con objeto de cumplir los requisitos del RGPD y proteger los derechos de los interesados (artículo 25 RGPD).

Además, el RGPD obliga al responsable a aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un *nivel de seguridad* adecuado al riesgo (artículo 32). Los tratamientos de datos personales que se efectúen por las

comunidades autónomas y, en su caso, por las ciudades de Ceuta y Melilla en el marco de la identificación de animales de compañía regulada en el proyecto normativo, están sometidos al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

III

El **artículo 2.2.d)** del proyecto define la “*identificación individual*” del animal de compañía como el “*procedimiento que consiste en implantar o asignar a un animal de compañía un medio de identificación autorizado para su especie, inscribirlo en el registro de identificación correspondiente, de manera que se pueda relacionar al mismo con su titular, ya sea persona física o jurídica.*”

Por tanto, la *identificación individual* de un *animal de compañía* (en el sentido indicado por el **artículo 2.2.d** del proyecto), cuando su titular sea una persona física, entrañará un tratamiento de datos de carácter personal sometido al RGPD y a la LOPDGD. Sin perjuicio de lo cual, cuando el titular del animal de compañía sea una persona jurídica, la identificación del animal podrá suponer también un tratamiento de datos de carácter personal: los que conciernen al veterinario identificador en caso de que éste intervenga como profesional.

La Ley 7/2023, cuya finalidad es definir el marco normativo que permita alcanzar la máxima protección de los derechos y el bienestar de los animales incluidos en su ámbito de aplicación, creó (artículo 9) el Sistema Central de Registros para la Protección Animal (SICERPA) que se adscribe a un departamento ministerial y cuyo objetivo (artículo 9.1) es la coordinación entre los diferentes registros dependientes de las comunidades autónomas, (que son, por otra parte, las únicas personas de Derecho público que menciona el artículo, pues no hace referencia a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).

En el punto 2, el artículo 9 de la Ley de bienestar animal dispone que dicho Sistema estará integrado por cinco registros, entre ellos, por lo que ahora interesa, el *Registro de Animales de Compañía*.

El artículo 9.3 de la Ley, obliga a las comunidades autónomas a incorporar (“*incorporarán*”, dice el literal de la norma) a cada uno de los cinco Registros, en el ejercicio de sus competencias, “la información recogida en sus sistemas de información que deberán crear o actualizar con la información que se determine reglamentariamente y que estará limitada a la consecución de la finalidad perseguida en cada caso, conforme a los criterios de interoperabilidad que el departamento ministerial correspondiente determine.”

Además, el texto legal establece en el artículo 10, “*Naturaleza del Sistema Central de Registros de Protección Animal*”, punto 5, que **las comunidades autónomas son responsables del tratamiento** de los datos obrantes en los registros, de acuerdo con sus respectivos ámbitos competenciales:

“*Son responsables del tratamiento de los datos obrantes en los registros el departamento ministerial correspondiente y las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos ámbitos competenciales.*”

Por lo que respecta a los **datos de carácter personal** que a tenor de la Ley 7/2023 pueden ser objeto de tratamiento para la consecución de las finalidades de interés público que persigue, establece el artículo 10.4 que son *“todos aquellos que resulten imprescindibles para procurar la protección y garantía de los derechos de los animales”* y añade en su último inciso una referencia al principio de limitación de la finalidad (artículo 5.1.b) pues dice que *“Estos datos no podrán ser tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.”*

Esta fórmula general se concreta en el artículo 10.6, c) de la Ley 7/2023, *“Registro de Animales de Compañía”*, que dispone:

“la inscripción de cualquier animal de compañía que, conforme a lo dispuesto en esta ley o en las disposiciones normativas de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, dispongan de un sistema de identificación obligatoria, así como la identidad de su propietarios o responsables.

Este registro tiene por finalidad facilitar la identificación y trazabilidad de cualquier animal abandonado en cualquier punto del territorio nacional, con independencia de la comunidad autónoma o ciudad autónoma en que hubiera sido registrado.

Para ello, en este registro se incluirán los datos identificativos y sanitarios del animal, si realizan actividades asociadas a actividades humanas, como la actividad cinegética, empleo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o actividad de pastoreo, junto con los datos identificativos de la persona propietaria o responsable.”

Partiendo de las previsiones legales mencionadas, el proyecto sometido a informe establece (**artículo 3.1**) que *la identificación individual* de los animales de compañía, en las especies en que sea obligatoria, consistirá en un código único que deberá inscribirse en el registro de animales de compañía de la comunidad **o ciudad autónoma** en la que el animal tenga su residencia habitual.

En este punto, se hace ver que, aun cuando el proyecto de real decreto alude al *“registro de animales de compañía de la [...] **ciudad autónoma**”* y se refiere también a ambas ciudades autónomas en sus artículos 3.3, 3.11 y en su disposición transitoria segunda, sin embargo, la Ley 7/2023 no contiene una previsión **explícita** que habilite a las ciudades de Ceuta y Melilla para los tratamientos de datos que regula la norma proyectada.

La Ley 7/2023, ha expresado (artículo 9.1) que el **“objetivo”** del Sistema Central de Registros para la Protección Animal, *“es la coordinación entre los diferentes registros dependientes de las comunidades autónomas”* y (artículo 10. 5) que *“Son responsables del tratamiento de los datos obrantes en los registros el departamento ministerial correspondiente y las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos ámbitos competenciales.”*

Por otra parte, el proyecto contempla la denominada *“información mínima”* que deberá consignarse en el registro de animales de compañía. Esta información será accesible obligatoriamente a través del SICERPA. En ese sentido, el **artículo 3.2** del proyecto dispone:

“La información mínima que debe consignarse en el registro de animales de compañía correspondiente y sobre la que se permitirá el acceso a través del Sistema Central de Registros de Protección Animal, será la recogida en el anexo I.”

El Anexo I detalla cuál es esa información mínima: un listado de datos, algunos referentes exclusivamente al animal y otros que tienen la naturaleza de datos de carácter personal en el sentido del artículo 4.1 del RGPD.

El Anexo I, “*Información mínima sobre animales de compañía de identificación obligatoria*”, tiene dos apartados (A y B), en los que recoge, respectivamente, la información mínima para el caso de perros, gatos y hurones (A) y para el caso de aves (B).

En cuanto a los primeros (A), perros, gatos y hurones, los datos de carácter personal que integran la información mínima y que por tanto serán accesibles a través del SICERPA sin restricción, son: nombre completo, NIF, dirección, correo electrónico si dispone de él y teléfono de las personas titulares. Los mismos datos de la persona responsable, en su caso. *“El Historial de titulares: contendrá el histórico de titulares del animal desde su identificación (nombre completo y NIF).”* En el caso de los perros, si procede, la administración pública que ha emitido el documento acreditativo de haber superado el curso de tenencia responsable y fecha de emisión. Estado del animal (localizado, perdido, sustraído) y fecha. Información a efectos de localización del titular en caso de extravío o pérdida. Y el número de colegiado y provincia del profesional veterinario identificador que realiza la identificación, en su caso.

Por lo que concierne al animal, la información mínima prevista es exhaustiva. Entre otra, el código de identificación; número de duplicado, en su caso; localización (en el cuerpo del animal) del medio de identificación; fecha en la que se implanta el medio de identificación; el número del pasaporte de identificación del animal, en su caso; fecha de lectura del transpondedor, en caso de renovación del pasaporte; especie, sexo, subespecie y raza, si procede; fecha de nacimiento; si se dispone de él, código de identificación de los progenitores; categoría dentro de estos grupos: básica, gato comunitario, o alguna de las categoría para animales asociados a actividades humanas—Si procede, o no, de criador no identificado; condición o no de perro potencialmente peligroso; sobre pruebas de aptitud del animal: fecha, resultado e identificación del profesional que la realiza; en el caso de perros, fecha de cualquier agresión a personas o animales conocidas por las autoridades administrativas o judiciales; si el animal es o no un ejemplar reproductor y su estado (esterilizado o no); información veterinaria relevante (mutilaciones terapéuticas, vacunaciones obligatorias y desparasitación; fecha de revisión veterinaria anual, número de cesáreas y de camadas) fecha y causa de la baja y lugar de residencia si difiere de el del titular.

Respecto a las aves (B), los datos de carácter personal que integran la información mínima que será accesible al SICERPA sin restricción, son: nombre completo, NIF, dirección, correo electrónico si dispone de él, y teléfono de la persona titular. *“Historial de titulares: contendrá el histórico de titulares del animal desde su identificación (nombre completo y NIF).”* Información a efectos de localización del titular en caso de extravío o pérdida. Número de colegiado y provincia del profesional veterinario identificador que realiza la identificación.

Por lo que concierne al animal, la información mínima incluirá el número de anilla o transpondedor o rango de anillas, en su caso; especie; año de nacimiento; estado del animal (localizado, perdido, sustraído) y fecha; fecha de baja, en su caso y si procede o no de un criador no registrado.

Además, el proyecto se refiere en su **artículo 5.4.** a los requisitos para la identificación de animales de compañía distintos a las aves. Indica que se determinarán cuando su especie, subespecie o raza se incluya en el Listado de Especies Domésticas de Compañía (artículo 34.b, de la Ley 7/2023) o en el Listado Positivo de Animales de Compañía que corresponda (regulado en el artículo 35 de la Ley 7/2023). El tipo de identificación será determinado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, mediante orden ministerial, previo informe del Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales.

En cuanto al medio obligatorio de identificación del animal que el proyecto contempla, basta indicar que, (artículo 4.1) respecto a perros, gatos y hurones será el “*transpondedor electrónico inyectable*” y se hará constar el lugar exacto de su colocación en el registro de animales de compañía. Respecto de las aves, el proyecto (artículo 5.1) determina que la identificación se hará mediante anillado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, cuando su especie, subespecie o raza esté incluida en el Listado de Especies Domésticas de Compañía o en el Listado Positivo de Animales de Compañía.

El artículo 4.2 del RGPD define el tratamiento como “*cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción*”.

A tenor de las disposiciones del proyecto, interpretadas a la luz de la Ley 7/2023, se evidencia que la norma prevé la existencia de varios tratamientos de datos de carácter personal:

(i) Un tratamiento que consistirá en la *recogida* en el registro de animales de compañía de la comunidad o ciudad autónoma en la que el animal tenga su residencia habitual y en la *conservación* en dicho registro del código de identificación y otros datos relativos al animal, así como de numerosos datos de carácter personal, fundamentalmente concernientes al titular del animal, que se detallan en el Anexo I (“*Información mínima sobre animales de compañía de identificación obligatoria*”).

(ii) Se prevé, también, un tratamiento de datos que consistirá en *habilitar el acceso o permitir* (**artículo 3.2**) “*el acceso a través del Sistema Central de Registros de Protección Animal*” (SICERPA) a la información mínima que se relaciona en el Anexo I, que incluye datos de carácter personal además de los relativos al animal.

El principio de licitud (artículo 5.1.a) del RGPD) exige que todo tratamiento de datos de carácter personal tenga una base jurídica adecuada conforme al RGPD.

Cuando el tratamiento de datos se lleva a cabo por una administración pública, como aquí acontece, con carácter general, únicamente los motivos recogidos en los apartados c) o e) del artículo 6.1 RGPD podrán ser fundamento de licitud.

“c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento” o

“e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”.

Para que cualquiera de esas circunstancias resulte aplicable, es indispensable que la base jurídica esté expresamente establecida en el Derecho de la Unión o en una norma interna con rango de Ley. El artículo 6.3. del RGPD dispone:

“3. La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser establecida por:

a) el Derecho de la Unión, o

b) el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.

El párrafo segundo del artículo 6.3 del RGPD indica que *“La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), será necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. [...]”*

A su vez, el artículo 8 de la LOPDGDD, *Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos*, exige que la obligación legal se imponga en una norma con rango de Ley (para la base jurídica del artículo 6.1.c) y (para la base jurídica del artículo 6.1.e) que la misión de interés público derive de una competencia atribuida por una norma con rango de Ley.

La habilitación mediante una norma con rango de Ley es también una exigencia de la Constitución Española cuyo artículo 53.1 indica que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos y que, sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de los derechos reconocidos en el capítulo segundo del Título I, entre los que figura el artículo 18.4 en el que se encuadra el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Igualmente, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales (en adelante la Carta), que reconoce en su artículo 8 el derecho de toda persona a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan, prevé en su artículo 52.1 que podrán limitarse los derechos y libertades reconocidos en ella si bien la limitación deberá ser establecida por la Ley y respetar su contenido esencial.

A ese respecto, es ilustrativa la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 76/2019, de 22 de mayo, que cita, entre otras, su anterior STC 292/2000, de 30 de noviembre, y señala:

“[...] por mandato expreso de la Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas ora incida directamente sobre su desarrollo (art. 81.1 CE), ora limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE), precisa una habilitación legal (por todas, STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4). En la STC 49/1999, FJ 4, definimos la función constitucional de esa reserva de ley en los siguientes términos:

Esa reserva de ley a que, con carácter general, somete la Constitución española la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en su Título I, desempeña una doble función, a saber: de una parte, asegura que los derechos que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes; y, de otra, en un Ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los Jueces y Magistrados se hallan sometidos “únicamente al imperio de la Ley” y no existe, en puridad, la vinculación al precedente (SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996) constituye, en definitiva, el único modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por eso, en lo que a nuestro Ordenamiento se refiere, hemos caracterizado la seguridad jurídica como una suma de legalidad y certeza del Derecho (STC 27/1981, fundamento jurídico 10).”

Esta doble función de la reserva de ley se traduce en una doble exigencia: por un lado, la necesaria intervención de la ley para habilitar la injerencia; y, por otro lado, esa norma legal “ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad jurídica”, esto es, “ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención” (STC 49/1999, FJ 4). En otras palabras, “no sólo excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias [...], sino que también implica otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece tales límites” (STC 292/2000, FJ 15).

Además, dicha ley deberá respetar en todo caso el principio de proporcionalidad, tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2003, de 28 de enero:

“En otras palabras, de conformidad con una reiterada doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales tiene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan basta con recordar que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto; SSTC 66/1995, de 8 de mayo [RTC 1995, 66] , F. 5; 55/1996, de 28 de marzo [RTC 1996, 55] , FF. 7, 8 y 9; 270/1996, de 16 de diciembre [RTC 1996, 270] , F. 4.e; 37/1998, de 17 de febrero [RTC 1998, 37] , F. 8; 186/2000, de 10 de julio [RTC 2000, 186] , F. 6).”

Esa es también la doctrina mantenida por el Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE). La STJUE de 6 de octubre de 2020, en los casos acumulados C-

511/18, C-512/18 y C-520/18, La Quadrature du Net y otros, en su apartado 175, recuerda:

“En cuanto a la justificación de dicha injerencia, cabe precisar que el requisito, previsto en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que la permita debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).”

Procede por ello examinar cuál es la circunstancia del artículo 6.1 del RGPD que ampara la licitud de los tratamientos de datos de carácter personal previstos en la norma sometida a informe:

(l) Tratamiento que consiste en la recogida y la conservación en el registro de animales de compañía de la comunidad o ciudad autónoma en la que el animal tenga su residencia habitual de los datos de carácter personal que se detallan en el Anexo I del proyecto.

Este tratamiento, **cuando se efectúe por las comunidades autónomas**, tiene su base jurídica en el artículo 6.1.e) del RGPD: *“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”*.

En este punto, es preciso reiterar la mención del artículo 10.5 de la Ley 7/2023 a tenor del cual *“Son responsables del tratamiento de los datos obrantes en los registros el departamento ministerial correspondiente y las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos ámbitos competenciales.”*

Por otra parte, el artículo 10.3 de la Ley 7/2023, dispone:

“La base jurídica principal del tratamiento, de acuerdo con el objetivo y finalidad de la presente ley, es el cumplimiento de la misión de interés público consistente en procurar la protección y garantía de los derechos de los animales, de acuerdo con lo dispuesto en la letra e) del apartado primero del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679”.

Por tanto, en relación con el tratamiento que está previsto que lleven a cabo las comunidades autónomas (la recogida y conservación en sus registros de animales de compañía) se cumple la previsión del artículo 6.3 del RGPD que exige contar con una habilitación legal, que viene establecida en este caso en el artículo 10.3 de la Ley 7/2023.

Además, la necesidad del tratamiento también está prevista en la Ley 7/2023. Así, junto con la finalidad general (artículo 10.1), el artículo 10.6 de la Ley 7/2023 dice: *“Este sistema, integrado por la información que consta en los registros que a continuación se relacionan, tiene por objeto, en cada caso:*
[...]

c) *Registro de Animales de Compañía: la inscripción de cualquier animal de compañía que, conforme a lo dispuesto en esta ley o en las disposiciones normativas de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, dispongan de un sistema de identificación obligatoria, así como la identidad de su propietarios o responsables.*

Este registro tiene por finalidad facilitar la identificación y trazabilidad de cualquier animal abandonado en cualquier punto del territorio nacional, con independencia de la comunidad autónoma o ciudad autónoma en que hubiera sido registrado.

Para ello, en este registro se incluirán los datos identificativos y sanitarios del animal, si realizan actividades asociadas a actividades humanas, como la actividad cinegética, empleo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o actividad de pastoreo, junto con los datos identificativos de la persona propietaria o responsable.

(ii) Tratamiento de datos efectuado por las **comunidades autónomas** que consiste en *habilitar el acceso o permitir (artículo 3.2) “el acceso a través del Sistema Central de Registros para la Protección Animal” (SICERPA) a la información mínima, relacionada en el Anexo I, que consta en sus registros de animales de compañía.*

Este tratamiento puede tener su fundamento jurídico, indistintamente, en las circunstancias del artículo 6.1.e) o 6.1.c) del RGPD.

En cuanto a la circunstancia legitimadora de la letra e), nos remitimos a las consideraciones recogidas en el apartado (i), precedente.

Respecto a la base jurídica de la letra c) del artículo 6.1. del RGPD, esta disposición debe conectarse con el artículo 9.3 de la Ley 7/2023, precepto legal que obliga a las comunidades autónomas a incorporar (incorporarán, dice la norma) la información recogida en sus sistemas a cada uno de los Registros que integran el SICERPA: “Las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, incorporarán a cada Registro la información recogida en sus sistemas de información que deberán crear o actualizar con la información que se determine reglamentariamente y que estará limitada a la consecución de la finalidad perseguida en cada caso [...]”.

Sin embargo, la documentación aportada por la Administración consultante con el texto del proyecto **no nos permite conocer cuál es el fundamento jurídico del tratamiento** de datos de carácter personal **que**, a tenor del proyecto de real decreto, **llevarían a cabo las ciudades de Ceuta y Melilla.**

Tratamiento que consistiría, como se ha señalado, por una parte, en la *recogida*, en el registro de animales de compañía de la ciudad autónoma en la que el animal tenga su residencia habitual, de datos de carácter personal concernientes, básicamente, al titular del animal (detallados en el Anexo I del proyecto, “*Información mínima sobre animales de compañía de identificación obligatoria*”) y en su conservación en dicho registro. Por otra, en habilitar a través del SICERPA el acceso a la información mínima recogida en el registro o sistema de las ciudades autónomas.

Como hemos referido, la Ley 7/2023 no contempla explícitamente que las ciudades autónomas (sujetos de derecho con personalidad jurídica propia) efectúen los tratamientos de datos que la norma proyectada les asigna.

Ahora bien, no puede obviarse que la Ley 7/2023 dice expresamente en su artículo 10, “*Naturaleza del Sistema Central de los Registros para la Protección Animal*”, que “su ámbito se extiende a todo el territorio español”. Ni tampoco, que la Ley 7/2023, a través de su articulado, ha tenido en cuenta reiteradamente la presencia y la actuación de las ciudades autónomas, incluso equiparando en ocasiones su intervención con la prevista para las Comunidades Autónomas.

A título de ejemplo, sin ánimo de ser exhaustivos, pero sí de reflejar hasta qué punto el texto legal toma en consideración la intervención de las dos ciudades autónomas, cabe mostrar estas referencias a Ceuta y Melilla contenidas en la Ley:

- (i) se alude a ellas en el Título I, con ocasión de regular el Fomento de la protección animal, en particular el Consejo Estatal de Protección Animal (artículo 5);
- (ii) se les asignan competencias en la elaboración de estadísticas e informes de viabilidad (artículo 13);
- (iii) se prevé que puedan recibir, como las CCAA, ayudas estatales para promover la protección animal (artículo 19);
- (iv) al regular la colaboración institucional (artículo 20) se alude a las competencias que pudieran tener atribuidas;
- (v) el artículo 22 prevé la posibilidad de que la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal se derive a las ciudades autónomas;
- (vi) el artículo 39, relativo a las colonias felinas, dispone que, en ausencia de otra previsión en la legislación autonómica, y respetando el ámbito competencial establecido por la legislación vigente, corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, a cuyos efectos deberán desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas que incluirán, al menos, los siguientes aspectos: [...] g) Cualesquiera otros previstos en los protocolos marco de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla a las que pertenezcan, debiendo en todo caso, elevar anualmente a las mismas un informe estadístico respecto de la implantación y evolución de
- (vii) el artículo 40 de la Ley, bajo la rúbrica “*Funciones de la Administración autonómica*”, dispone que “Corresponde a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla: Generar protocolos marco con los procedimientos y requisitos mínimos que sirvan de referencia para la implantación de programas de gestión de colonias felinas en los términos municipales Estos protocolos deberán desarrollar, como mínimo, los siguientes aspectos:”, tras lo cual relaciona los apartados a) a j).
- (viii) el Título V de la Ley 7/2023, *Inspección y vigilancia*, dice en su artículo 66, *Función inspectora*, que “Corresponde a los órganos competentes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades locales de las entidades locales, la inspección y vigilancia de las instalaciones de los centros de protección animal y de los animales que se alojen en ellas.”

Parece indiscutible la voluntad del legislador al elaborar la Ley 7/2023 de otorgar protagonismo a las ciudades de Ceuta y Melilla en las materias que son objeto de regulación, pese a lo cual, en el capítulo II, “*Sistema Central de Registros para la Protección Animal*”, del Título I, artículos 9 a 12, no encontramos una disposición que sirva de fundamento a las previsiones que en relación con ellas se incluyen en el proyecto de real decreto.

Cabe subrayar, por otra parte, la singular naturaleza que tienen ambas ciudades en el conjunto de la estructura del Estado, pues si bien están dotadas de un Estatuto de Autonomía (Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995 de 13 de enero) que dispone (artículo 1) que *acceden a su régimen de autogobierno y gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con la Constitución, en los términos del presente Estatuto y en el marco de la solidaridad entre todos los territorios de España*”, son entidades locales territoriales rigiéndose, por tanto, conjuntamente con sus respectivos Estatutos de Autonomía, por la Ley 7/1985, de 2 de agosto, Reguladora de Bases de Régimen Local.

En esta situación, **se hace notar por esta Agencia la necesidad** de que la Administración remitente del proyecto **justifique cuál es la habilitación legal** para los tratamientos de datos que la norma proyectada tiene previsto que las ciudades autónomas lleven a cabo.

IV

El **artículo 3.2** del proyecto dispone que la información mínima que deberá consignarse en el registro de animales de compañía correspondiente será la indicada en el Anexo I y añade: “*Dicha información será registrada por el profesional veterinario identificador o la autoridad competente, en su caso.*”

El proyecto (**artículo 2.2.j**) define al “*Profesional veterinario identificador*” como “*aquellos profesionales veterinarios colegiados reconocidos por la autoridad competente para las funciones de identificación de animales de compañía.*”

A tenor de la definición sobre “*identificación individual de animales de compañía*” que ofrece el **artículo 2.2.d**) del proyecto, este proceso comprende no sólo la implantación o asignación al animal del medio de identificación autorizado que corresponda para su especie, sino también la inscripción en el registro correspondiente de la identificación.

El **artículo 6** está dedicado a regular las actuaciones del profesional veterinario identificador respecto a la identificación electrónica de animales de compañía:

“*El profesional veterinario identificador comprobará que el animal de compañía no tiene implantado ningún medio de identificación, y posteriormente procederá a:*

- a) Realizar el acto clínico de implantar al animal el transpondedor inyectable.*
- b) Verificar que el código de identificación electrónica se lee correctamente, antes y después de su implantación.*

c) Inscribir en el registro de animales de compañía autonómico correspondiente los datos contemplados en el anexo I, tras la implantación del transpondedor.”

Nótese que cuando el **artículo 6** del proyecto atribuye al profesional veterinario identificador la función de inscribir los datos de identificación que se relacionan en el Anexo I, se refiere, exclusivamente a la inscripción en el “*registro de animales de compañía autonómico*”. Extremo que contrasta con otras disposiciones del proyecto en las que se mencionan, además de los registros de las comunidades autónomas, los de las ciudades de Ceuta y Melilla (así, los **artículos 3.1, 3.11** y la **disposición transitoria segunda**)

El tratamiento de datos de carácter personal que realiza el veterinario identificador cuando inscribe en el registro de animales de compañía la información que se detalla en el Anexo I del proyecto, se efectúa en calidad de **encargado de tratamiento**.

El artículo 4.8 del RGPD define esta figura como “*la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento*”.

Las Directrices 07/2020 “*sobre los conceptos de responsable del tratamiento y encargado del tratamiento en el RGPD*”, de 7 de julio de 2021, versión 2.0, identifican con detalle los elementos que caracterizan el encargo de tratamiento:

“76. Para ser considerado encargado del tratamiento, es necesario reunir dos condiciones fundamentales: a) ser un ente independiente del responsable del tratamiento; y b) tratar datos personales por cuenta del responsable.

77. Con la expresión un ente independiente se entiende que el responsable del tratamiento decide delegar todas las actividades de tratamiento o parte de ellas a una organización externa. [...].

79. Por otra parte, tratar datos personales por cuenta del responsable requiere, en primer lugar, que el ente independiente trate los datos personales en beneficio del responsable. [...].

En segundo lugar, el tratamiento debe llevarse a cabo por cuenta de un responsable del tratamiento, pero no bajo su autoridad ni control directos. Actuar «por cuenta de» alguien significa servir los intereses de otro y remite al concepto jurídico de «delegación». En el caso de la normativa de protección de datos, el cometido del encargado del tratamiento es aplicar las instrucciones dadas por el responsable del tratamiento, cuando menos en lo relativo a los fines del tratamiento y a los elementos esenciales de los medios. [...]

81. Actuar «por cuenta de» alguien también significa que el encargado no puede llevar a cabo el tratamiento para sus propios fines. Tal como se estipula en el artículo 28, apartado 10” del RGPD.

Por consiguiente, la **actuación del profesional veterinario identificador prevista en el proyecto constituye un encargo de tratamiento que se rige por el artículo 28 del RGPD**.

Será preciso, por ello, que la administración responsable del registro de animales de compañía documente por escrito el encargo de tratamiento que deberá adecuarse en todo caso a las previsiones del artículo 28 del RGPD.

En ese sentido, el apartado 3 del artículo 28 del RGPD exige que *“el encargo de tratamiento se rija por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable.”* Dicho contrato o acto jurídico deberá incluir las estipulaciones que se detallan en las letras a) a h).

El **artículo 5** del proyecto, relativo a los *“Requisitos específicos en la identificación de otros animales de compañía distintos de perros, gatos y hurones”*, con ocasión de regular la identificación de aves, dispone en el **punto 2**, inciso segundo:

“Las federaciones deportivas, así como las asociaciones y entidades encargadas de la selección y cría de aves, podrán ser autorizadas por la autoridad competente para la identificación de aves. Para ello deberán garantizar la trazabilidad de la identificación y comunicar anualmente la información contenida en el anexo I.B.”

La información contenida en el anexo I.B del proyecto, al que alude el **artículo 5**, contiene datos de carácter personal.

Por consiguiente, las federaciones deportivas y las asociaciones y entidades encargadas de la selección y cría de aves que sean autorizadas por la autoridad competente para la *“identificación de aves”*, actúan como encargadas de tratamiento del responsable del registro, las comunidades autónomas. Y, como se ha indicado a propósito del profesional veterinario identificador, tal actuación queda sometida a las previsiones del artículo 28 del RGPD.

Esta Agencia estima conveniente sugerir que se recoja en el proyecto de real decreto la condición de encargado de tratamiento que tienen el profesional veterinario identificador en el supuesto descrito en su **artículo 6** y las federaciones deportivas, asociaciones y entidades encargadas de la selección y cría de aves, en el supuesto descrito en el **artículo 5** del proyecto, así como la obligación de cumplir las previsiones del artículo 28 del RGPD.

V

Los tratamientos de datos de carácter personal que se contemplan en el proyecto, de los que serían responsables las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, deben cumplir, acumulativamente, todos los principios que presiden el tratamiento recogidos en el artículo 5 del RGPD.

El proyecto contiene algunas disposiciones relacionadas con el principio de exactitud (art. 5.1.d, RGPD) que contribuyen a hacerlo efectivo en los tratamientos previstos, lo que se valora positivamente.

Así, el proyecto dispone que el titular del animal será responsable de mantener actualizados los datos que sean de su competencia (**artículo 3.2.**) Se obliga a inscribir

en el registro de animales de compañía de la comunidad o ciudad autónoma de destino, en el plazo máximo de un mes desde su llegada, los animales de compañía procedentes de otras comunidades autónomas que cambien de residencia habitual sin transmisión de titularidad (**artículo 3.6**) Se impone al nuevo titular de un animal de compañía la obligación de comunicar al registro de animales de compañía que corresponda, en un plazo de tres días hábiles desde la firma del contrato, la transmisión del animal (**artículo 3.7**). Y en caso de muerte del animal se impone al titular la obligación de comunicar la baja en el registro correspondiente en un plazo de siete días hábiles (**artículo 3.11**).

Sin embargo, el proyecto no dice nada sobre el principio de transparencia: la obligación que incumbe al responsable del tratamiento de adoptar las medidas oportunas para facilitar al interesado la información indicada en los artículos 13 y 14 del RGPD y cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 del RGPD relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo (artículo 12.1 del RGPD).

El **Anexo I** del proyecto (*Información mínima sobre los animales de compañía de identificación obligatoria*), en sus dos apartados, A y B, incluye en la relación de los datos que deben recogerse e incorporarse al registro correspondiente, el "*Historial de titulares: contendrá el histórico de titulares del animal desde su identificación (nombre completo y NIF)*".

Esta previsión incluida en la norma que se proyecta aprobar significa en la práctica que los datos personales de los antiguos titulares del animal se conservarán sin limitación de tiempo, o más exactamente por el tiempo de vida del animal de compañía siempre y cuando en el momento de su muerte el entonces titular lo comunique al registro, vulnerando con ello el principio de limitación del plazo de conservación (artículo 5.1.e, RGPD). Esto, pese a que los datos personales de los antiguos titulares dejan de ser necesarios en relación con la finalidad del tratamiento desde que cesan en la titularidad del animal, por lo que, de conformidad con el artículo 17.1.a) del RGPD procedería su supresión.

Esta Agencia estima que la previsión del proyecto que se menciona resulta **contraria a los principios de limitación del plazo de conservación** (artículo 5.1.e RGPD), **de minimización** (artículo 5.1.c RGPD) y **limitación de la finalidad del tratamiento** (artículo 5.1.b RGPD).

El artículo 10.6.c) de la Ley 7/2023 concreta cuál es la finalidad del registro de animales de compañía y cuáles los datos que son necesarios para atender tal finalidad. Cumple así las exigencias inherentes a una Ley que habilita una limitación de los derechos fundamentales.

A ese respecto, en relación con la norma con rango de Ley que habilita la injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas, la STC 49/1999, de 5 de abril, dispone que "*ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad jurídica*", esto es, "*ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención (FJ 4)*".

En idéntico sentido, la STJUE de 6 de octubre de 2020, asunto C-623/17 (epígrafe 65) dice: *"Cabe añadir que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que permita la injerencia en dichos derechos debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C 311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada)"*.

El artículo 10.6.c) de la Ley de bienestar animal establece:

"Este registro tiene por finalidad facilitar la identificación y trazabilidad de cualquier animal abandonado en cualquier punto del territorio nacional, con independencia de la comunidad autónoma o ciudad autónoma en que hubiera sido registrado.

Para ello, en este registro se incluirán los datos identificativos y sanitarios del animal, si realizan actividades asociadas a actividades humanas, como la actividad cinegética, empleo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o actividad de pastoreo, junto con los datos identificativos de la persona propietaria o responsable."

En otras palabras, el precepto legal especifica que para cumplir la finalidad que busca satisfacer el registro (facilitar la identificación y trazabilidad de cualquier animal abandonado en cualquier punto del territorio nacional) se incluirán en él los datos identificativos *"de la persona propietaria o responsable"*. **No menciona a quienes dejaron de ser titulares o responsables del animal de compañía.**

El tratamiento previsto en el proyecto al exigir que se recoja, inscriba y sea accesible a través del SICERPA la información sobre el histórico de los titulares del animal de compañía (nombre y NIF), incumple el principio de limitación de la finalidad, que exige que los datos personales sean tratados para los fines determinados, explícitos y legítimos para los que fueron recogidos y no sean tratados ulteriormente para fines incompatibles con los iniciales.

Incumple también el principio de minimización, que obliga a que los datos sean adecuados, pertinentes, y limitados en relación con la finalidad del tratamiento. A propósito del principio de minimización de datos, la STJUE de 4 de octubre de 2024, asunto C-446/21, (epígrafe 59) se expresa en estos términos:

"es importante recordar que el Tribunal de justicia ya ha declarado que, teniendo en cuenta el principio de minimización de datos establecido en el artículo 5, apartado 1, letra c), del RGPD, el responsable del tratamiento no puede proceder, de manera generalizada e indiferenciada, a la recogida de datos personales y que debe abstenerse de recoger datos que no sean estrictamente necesarios en relación con los fines del tratamiento [sentencia de 24 de febrero de 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Tratamiento de datos personales con fines fiscales), C 175/20, EU:C:2022:124, apartado 74]".

Esta Agencia estima procedente sugerir que se elimine de la relación del Anexo I, apartados A y B del proyecto, la mención al *"Historial de titulares: contendrá el histórico de titulares del animal desde su identificación (nombre completo y NIF)"*.

Igualmente, estima procedente sugerir que en el proyecto se haga constar expresamente que **los registros de animales de compañía procederán al bloqueo de los datos personales de las personas físicas que hubieran dejado de ser titulares de un animal de compañía**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la LOPDGDD.